
Etiopía, el desafío a la historia

Bahru Zewde

Pocas sociedades pueden librarse de su propia historia. El presente sólo puede ser producto del pasado. Las instituciones, los hábitos y las actitudes no se conforman de modo inmediato; suelen tener su origen en desarrollos históricos, más o menos lejanos en el tiempo. Valga como muestra el ejemplo de África, que, pese a ser independiente en su casi totalidad desde 1960, todavía arrastra la rémora de su pasado colonial. El África francófona aún sigue unida a Francia por lazos culturales cuando no económicos, como siguen ligadas al Reino Unido las antiguas colonias británicas mediante una red de conexiones que abarcan desde las instituciones educativas a la Commonwealth.

Etiopía se ha distinguido siempre por ser la excepción a esta relación colonial. Aun así, el breve interludio de la ocupación fascista italiana (1936-1941) no pasó sin dejar huella. En otras ocasiones he examinado con cierta amplitud los documentos, rastros y ramificaciones de este período de la historia etíope (Bahru 2008, 375-

387). Baste aquí con señalar las festividades conmemorativas que generó, su perdurable impacto en los hábitos de consumo, y la considerable cantidad de mecánicos del automóvil y de población mestiza que dejó.

En cualquier caso, la existencia más o menos independiente que Etiopía fue capaz de forjarse es un caso singular en el contexto africano. Y finalmente condujo, en 1974, a una peculiar revolución social, una revolución que no sólo derribó a un monarca que se había mantenido de hecho en el poder durante casi seis décadas, sino también una dinastía cuyas raíces se remontaban al rey Salomón y a la reina de Saba. La revolución etíope de 1974 fue un cataclismo comparable como evento histórico a las revoluciones clásicas, como la francesa de 1789 o la rusa de 1917. Igual que éstas, fue una reorganización de la sociedad que supuso la liquidación política y económica de la antigua clase dominante y la aparición de una nueva. Todo ello acompañado de una agitación social considerable y de la pérdida de decenas de miles de vidas. En 1961, el proceso revolucionario entró en una segunda fase que implicó el derrocamiento del régimen militar que había presidido todo el proceso y el nacimiento de un nuevo orden que proclamaba el predominio político de los pueblos y nacionalidades que, hasta aquel momento, habían sido marginados.

En teoría, se suponía que ambas «revoluciones» debían inaugurar una era limpia de todas las injusticias del pasado y liberada de la carga que suponían. En realidad, tras las sonadas manifestaciones de cambios, ciertas líneas de continuidad se mantuvieron inalterables. Como dicen los franceses: *«Plus ça change, plus ça reste la même chose»*, es decir, por más que se cambie sigue siendo lo mismo, o casi. Examinaremos aquí tres elementos de la política etíope que apoyan esta idea: las tradiciones autoritarias, la ética militarista y el peso de la ideología.

Las tradiciones autoritarias

Tradicionalmente, el Estado etíope estuvo siempre imbuido de una fuerte carga de autoritarismo. El monarca gozaba de amplios poderes, en ocasiones de un poder absoluto, sobre los bienes y las vidas de sus súbditos. Incluso antes de la monarquía absolutista del emperador Haile Selassie (1930-1974), se puede citar el caso del emperador medieval Zara Yaqob (1434-1468), quien consiguió ejercer un terrorífico poder sobre sus súbditos mediante la adecuada combinación de fanatismo religioso y autoritarismo político (Taddesse 1972: 238-242, 284-285). Uno de los rasgos relevantes del enorme poder monárquico fue la precariedad de la nobleza. En las ocasiones en que la nobleza planteó un desafío a la monarquía, como fue el caso en la llamada *Zemene Mesafint* o era de los príncipes (c. 1770-1855), ésta siempre rivalizó por el control de la monarquía en vez de actuar como una entidad corporativa. A la precariedad de la nobleza se sumó la debilidad, cuando no la inexistencia, de una clase media o burguesa. De resultas de ello, Etiopía no ha gozado nunca de una carta magna ni de una revolución burguesa democrática.

Con excepción de un breve periodo de tiempo en el último cuarto del siglo XIX y en el primer cuarto del siglo XX, la historia de Etiopía, a partir de 1850, se ha caracterizado por el avance imparable hacia una creciente centralización. La idea de establecer un Estado unitario prendió primero en la exaltada mente del emperador Teodoro II (1855-1868), que realizó un desesperado intento para restaurar el poder y la gloria imperiales, que habían ido declinando desde mediados del siglo XVIII, si no antes. El sueño se convirtió en pesadilla ante la desafortunada combinación de insubordinación interior e invasión extranjera, y la voluble personalidad del monarca sólo contribuyó a empeorar las cosas. Aparentemente advertidos por los errores de su antecesor, Juan IV (1872-1879) y

Menelik II (1889-1913) adoptaron lo que retrospectivamente podría describirse como un enfoque más federalista respecto de los gobernantes locales. Juan IV era un *negusa nagast* o «rey de reyes» (título tradicional de los emperadores etíopes) en el verdadero sentido de la palabra; estaba dispuesto a delegar autoridad y otorgar el título de *negus* al menos a dos de los gobernantes locales, Menelik de Shewa y Takla-Haymanot de Gojam. Aunque hoy en día está bien visto en los círculos etno-socialistas asociar el nombre de Menelik con los aspectos más odiosos de la incorporación de las provincias del sur en el siglo XIX, este emperador no siempre fue tan duro y severo en su gobierno. En términos generales continuó con la política de transferencia de competencias que había iniciado su antecesor. Esta política no sólo benefició a la habitual nobleza regional de la zona central de Etiopía, sino también a algunos gobernantes de la recién incorporada periferia (Tesema, 1976: 83-84; Tekaglin, 1984: 46-47; Atieb, 1973: 51 y ss.).

Este tipo de concesiones regionales no fueron toleradas bajo el reinado del emperador Haile Selassie. Movido por la necesidad de fundar un Estado moderno que pudiera contar con la fuerza institucional y con los recursos financieros indispensables para responder a los desafíos europeos, Haile Selassie se embarcó en una política de centralización sin precedentes en la historia del país (Bahru, 1984: 1-29). Este proceso no perdonó ni a los veteranos generales de Menelik (como *Dejazmach* Balcha Safo de Sidamo), ni a los gobernantes hereditarios del sur (como *Aba* Jifar de Jima), ni a los del norte histórico (como *Negus* Mikael de Wollo, *Ras* Gugsu Welle de Bagemder y *Ras* Haylu Takla-haymanot de Gojam). Sólo la casa que gobernaba Tigray se libró casi totalmente de estas injerencias del centro. Los dos nietos del emperador Juan, *Ras* Seyum Mangasha y *Ras* Gugsu Araya –representantes de las dos ramas de esa casa– fueron confirmados como gobernantes, el primero de la parte oeste y el segundo de la parte este de la provincia, hasta 1935.

La rebelión campesina de 1943, más tarde denominada «primera rebelión Woyane» (precursora de la «segunda rebelión Woyane» que derrocó al régimen militar en 1991) empujó al gobierno central a imponer un gobierno directo muy severo encabezado por el veterano líder de la resistencia a la ocupación italiana, *Ras Abebe Aragay*. Esto se prolongó hasta 1947, cuando *Ras Seyum* fue nombrado gobernador de la provincia; su hijo *Ras Mangasha* le sucedió en el cargo hasta la revolución de 1974.

El proceso completo de centralización se inició mucho antes de la coronación del emperador en 1930. Un elemento importante de esta afirmación de la autoridad real fue la promulgación de la primera constitución de Etiopía, en 1931. La constitución fue fundamentalmente concebida para definir claramente las prerrogativas de la corona respecto de la nobleza local y poco tenía que ver con una verdadera carta de los derechos del pueblo. Este proceso de centralización de la autoridad política, interrumpido por la invasión fascista italiana de 1935 y la consiguiente ocupación del país, se reanudó en 1941, poco después de la restauración del emperador. Contemplaba la puesta en funcionamiento de una nueva estructura administrativa de las provincias, el restablecimiento de los ministerios con poderes acrecentados y la expansión de la burocracia (Bahru, 2001: 128-148, 201-209).

Este Estado imperial, que había empezado a ejercer un poder aún mayor sobre sus súbditos, alcanzó proporciones propias de un leviatán bajo el gobierno totalitario de Mengistu Haile Mariam. El Derg, nombre por el que se conocía al grupo de oficiales y suboficiales que en 1974 tomaron el poder tras derrocar al emperador, jamás tuvo la menor pretensión democrática. Lo primero que hizo, nada más deponer al emperador, fue prohibir todas las huelgas y manifestaciones, expresiones de un sentir popular que le habían catapultado al poder. Hacia febrero de 1977, cuando Mengistu emergió como el hombre fuerte tras haber liquidado a unos cuan-

tos elementos del Derg, incluido su presidente, el general Teferi Banti, que había intentado frenar su ascensión, puede decirse que se había acabado definitivamente con el movimiento popular que fue el trampolín de la revolución de 1974. Después de aquello Mengistu consiguió un grado de dominio absoluto sin precedentes en la historia de Etiopía, mediante una serie de medidas que le aseguraban un control total de las riendas del poder. Los campesinos estaban controlados por las asociaciones campesinas. Los residentes de las ciudades estaban bajo la férrea supervisión de las asociaciones vecinales de barrio. Hasta tal punto que el término en amárico para designarlas, *qabale*, evocaba imágenes de terror e intimidación. Ni los trabajadores, ni la juventud, ni la prensa —es decir ninguno de los componentes de lo que se entiende por sociedad civil— podían aspirar a la menor autonomía. Fue una ingente operación para remodelar la sociedad a imagen del régimen político. En suma, Mengistu llevó el autoritarismo inherente a la tradición política etíope a su máxima expresión.

El orden político posterior a 1991, con su credo de federalismo étnico, representaba, en apariencia, la perfecta antítesis del centralismo tanto del régimen imperial como del militar. Lo mismo el tratado firmado en 1991 por las victoriosas fuerzas etno-nacionalistas que la constitución promulgada en 1994 tras largas deliberaciones recogían el derecho de las naciones y nacionalidades a la autodeterminación, incluida la secesión. Se produjo también un notable avance en la libertad de expresión, en particular mediante la proliferación de medios de comunicación de carácter privado a partir de 1991. Pero las coerciones ejercidas para la aprobación de estos instrumentos de pluralismo político dan fe del peso de la tradición política de autoritarismo en este país.

Para empezar, el muy celebrado federalismo étnico se ha practicado bajo la égida del EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front / Frente Democrático Revolucionario Po-

pular de Etiopía), la amplia coalición de fuerzas formada a finales de la década de 1980. Y es cosa sabida que dicha coalición está dominada por el TPLF (Tigray People's Liberation Front / Frente de Liberación del Pueblo de Tigray), el frente que ha estado a la vanguardia del conflicto armado en la provincia norteña de Tigray desde 1975. Los partidos que controlan las regiones supuestamente autónomas, como la OPDO (Oromo People's Democratic Organization / Organización Democrática del Pueblo Oromo) y el ANDM (Amhara National Democratic Movement / Movimiento Nacional Democrático Amara) a cargo de las dos grandes regiones de Oromo y Amara respectivamente, siguen supeditados al TPLF. En otras palabras, el país está descentralizado, pero el poder sigue siendo central (International Crisis Group 2009). La mejor ilustración del descontento respecto al federalismo étnico es el surgimiento de pretendientes rivales que luchan enérgicamente por desacreditar a esos dos partidos regionales: el proscrito OLF (Oromo Liberation Front / Frente de Liberación Oromo), el OPC (Oromo People's Congress / Congreso del Pueblo de Oromo) y el OFDM (Oromo Federalistic Democratic Movement / Movimiento democrático Federalista de Oromo) en el caso del OPDO, y el AEUP (All Ethiopia Unity Party / Partido de la Unidad de Toda Etiopía) en el caso del ANDM.

Más aún, el espacio político de que podía disfrutar la oposición y la sociedad civil no ha dejado de reducirse, sobre todo a partir del éxito que obtuvo la oposición en las elecciones parlamentarias de 2001, difícilmente digerido por el partido en el poder. El gobierno reaccionó primero encarcelando a su adversario más peligroso, la CUD (Coalition for Unity and Democracy / Coalición por la Unidad y la Democracia) y a algunos miembros de los medios y de la sociedad civil, bajo la acusación de incitar a las protestas populares a raíz del anuncio de la victoria electoral por parte del partido en el poder. Siguió una serie de proclamas que restringían de for-

ma significativa las actividades de la oposición política, de los medios y de la sociedad civil. Especialmente significativa, a este respecto es la Proclamación de Organizaciones Benéficas y Sociedades de febrero de 2009 y la subsiguiente ley anti-terrorista.

La ética militarista

Con una antigüedad de cerca de dos milenios, el Estado etíope ha hecho gala de un grado de poder coercitivo desplegado tanto en la construcción de edificios que aún perduran, como en la expansión territorial. De ahí resulta una ética militar que lo imbuje todo y la fusión de los cargos políticos y militares. El mismo personal que en tiempos de paz se ocupaba de la administración y la justicia pasó a la oficialía militar cuando estalló la guerra. El moderno ejército etíope se fundó sobre estos cimientos. Como en tantas otras facetas de la historia de la Etiopía moderna, fue el emperador Teodoro el que inició el proceso que continuó Menelik y perfeccionó Haile Selassie. Concretamente, después de 1941 los discretos intentos de poner en pie un ejército moderno y profesional empezaron a afianzarse con mayor energía y confianza. Haile Selassie tuvo la habilidad necesaria para explotar juiciosamente recursos extranjeros variados (británicos, estadounidenses, noruegos y alemanes), evitando así una dependencia excesiva respecto a cualquiera de estos países, y formó unas fuerzas armadas impresionantes, tanto por su magnitud como por la calidad y la preparación de su ejército, guardia imperial, fuerzas aéreas, marina y policía.

El estallido de la revolución de 1974 y la emergencia del Derg supuso el inicio de una nueva era para la organización militar. Lo militar, que hasta entonces había sido un mero –si bien importante– adjunto del poder del Estado, pasó de pronto a identificarse con él. Este hecho tuvo importantes consecuencias. La más rele-

vante fue la asunción de una identidad dual en lo militar, a la vez institución y régimen político. Como decíamos más arriba, la fusión de los roles político y militar no es nada nuevo en Etiopía. Pero la aparición de una figura de militar estrictamente profesional, a partir de 1941, contribuyó en alguna forma a la definición de los papeles respectivos de la institución militar y el régimen político. Sin embargo, a partir de 1974, esta distinción ya no tenía sentido. La consecuencia fue que, según iba incrementándose la militarización de la política, también se fue incrementando la politización de lo militar. En última instancia, esta fusión de la función política y la función militar culminó en la debacle de 1991. En otras palabras, el fracaso político supuso el colapso militar.

En septiembre de 1974, una vez que Haile Selassie fue derrocado por las mismas fuerzas armadas que había construido con tanto esmero, inspiradas en las revolucionarias ideas de aquellos estudiantes que también el emperador había protegido, el país sufrió una expansión de lo militar y una militarización de la sociedad sin precedentes en toda su historia. Las fuerzas armadas multiplicaron por seis sus efectivos respecto a la etapa anterior a 1974, mediante una combinación de reclutamientos regulares, movilización de las milicias campesinas y la introducción del servicio militar obligatorio. Este proceso no se debió solo a la composición militar del Derg, sino también a los peligros internos y externos a los que éste tuvo enfrentarse: en lo exterior la agresión somalí de 1977 y en lo interior la insurgencia liderada por el EPLF (Eritrean People's Liberation Front / Frente Popular de Liberación de Eritrea) y el TPLF, que consiguieron acabar con él en 1991.

La rancia solera de lo militar en la historia etíope y la posición central que ocupaba en el engranaje social conllevaba un alto grado de militarismo. Ser soldado, llevar armas ha sido siempre en Etiopía signo de distinción viril. Los nombres de caballos que los reyes y los miembros de la nobleza solían adoptar dan fe de la im-

portancia que tenía la guerra en la vida social. Lo mismo sucede con el *fukura*, el canto de guerra tradicional que se entonaba para exhortar a los combatientes a las hazañas guerreras o para celebrarlas. Bajo el dominio del Derg, la combinación de disciplina militar e ideología marxista-leninista conformó una cultura nacional de conformidad y uniformidad. Tanto los hombres del Derg como sus adversarios, especialmente el TPLF, se habían criado en la misma tradición militar y habían mamado la misma ideología. De ahí que la confrontación sólo pudiera resolverse con la derrota absoluta de uno y la victoria absoluta del otro, con todo lo que esto implicaba para el posterior proceso de transición.

El peso de la ideología

A pesar de la coexistencia de islam y cristianismo en Etiopía a partir del final del primer milenio, Etiopía ha sido generalmente considerada como un país cristiano (o como suele decirse de forma más dramática y también inadecuada, «un islote de cristiandad en un mar de islam»). Si el cristianismo se convirtió en la religión y en la cultura dominante en lo religioso y en lo cultural fue gracias al patrocinio real. Esta cultura y esta religión quedaron así para siempre impresas en la historia del país y en la psique de sus partidarios. El legado de la Iglesia ortodoxa impregna el arte, la arquitectura, la literatura y la percepción moral de ese sector de la población que ha tenido el papel protagonista en la historia del país. Iglesia y Estado han vivido durante siglos en simbiosis, la Iglesia le ha procurado legitimidad al Estado, que a su vez ha asegurado a aquélla protección y prebendas.

Apenas si ha habido conflictos importantes entre el Estado y la Iglesia, pero la propia Iglesia se ha visto con harta frecuencia desgarrada por controversias internas. Tampoco es fácil especificar

cuál era el verdadero dogma ortodoxo de la Iglesia ortodoxa. En consecuencia, el sectarismo ha sido un síndrome endémico en la Iglesia etíope. El punto más conflictivo de la controversia doctrinaria se alcanzó en los siglos XVIII y XIX, cuando la Iglesia se dividió en diversas facciones en desacuerdo sobre la naturaleza de Cristo (Crummery, 1972: cap. II). Otro hecho significativo de la cristiandad etíope ha sido la tensión siempre subyacente entre la Iglesia oficial, por un lado, y, por otro, los monjes y eremitas que la acusan de dejarse contaminar gravemente por el mundo, especialmente en lo tocante a posesiones materiales y compromisos políticos (Taddesse, 1972: 108-118). De resultas de ello la cristiandad etíope contiene una vena de milenarismo que evoca visiones apocalípticas de un nuevo mundo perfecto, renacido de las cenizas del anterior (Merid, 1988: 161-172) A partir de 1991, esta tensión, recurrente en la historia religiosa de Etiopía, desembocó en una escisión radical entre la Iglesia oficial y las comunidades que encuentran más edificante el sermón de un eremita que la bendición de un patriarca. De hecho, el actual patriarca, Abuna Paulos, ha alcanzado una fama oprobiosa sin precedentes en la historia de la Iglesia.

Así como la ortodoxia religiosa fue en otros tiempos una preocupación esencial en Etiopía, en lo político la rectitud ideológica también ha sido fundamental en épocas más recientes. Es algo que empezó a mediados de la década de 1960, cuando el movimiento estudiantil decidió que el marxismo-leninismo era la panacea universal que Etiopía necesitaba. En ese sentido el paralelismo con Rusia es asombroso. Al igual que sucedió en Rusia, también en Etiopía hubo una transición casi imperceptible de la ortodoxia religiosa al dogmatismo ideológico sin que pudiera mediar la moderadora influencia de un período de libre pensamiento liberal. El marxismo, en sus diversas ediciones, leninista, estalinista y maoísta, fue la ideología dominante del primer movimiento estudiantil y,

más adelante, de toda la izquierda a partir de finales de los 1960. Esto empezó a mediados de la década, con el surgimiento de un pequeño, pero decidido, grupo de iniciados llamado «los Cocodrilos», probablemente porque la mayor parte de sus actividades se daban bajo la superficie, es decir en la clandestinidad. Su capacidad de organización, y su fe en la doctrina que había adoptado –en el extremo opuesto de la prevaricación de la mayoría liberal– le aseguraron la hegemonía ideológica y organizativa a partir de 1970 (Bahru, 2001: 223-226).

Esta hegemonía forjó el carácter de la revolución de 1974 y de los regímenes posteriores. Dicho de otra forma, fueron los estudiantes quienes establecieron el tono y los parámetros del proceso revolucionario. El Derg no tenía más remedio que imbuirse del discurso intelectual que habían iniciado los estudiantes si quería mantenerse en el poder. Mediante un largo y penoso proceso de formación ideológica, el Derg se capacitó para suplantar a la izquierda y proclamarse legítimo portador de los principios del marxismo-leninismo. Mengistu adoptó la retórica de la izquierda y las fórmulas organizativas del partido de la vanguardia obrera para establecer un control absoluto de la sociedad como ningún otro gobernante etíope había conseguido hasta entonces. El EPRDF, que derrocó al Derg en mayo de 1991, tenía credenciales de marxismo-leninismo más fiables, ya que sus líderes habían sido miembros del movimiento estudiantil en los primeros años de la década de 1970. Otra diferencia entre el Derg y el EPRDF es la rapidez con que este último se hizo con la situación internacional a finales de la década de 1980 y efectuó una transformación *formal* de una organización comunista en un amplio frente en lucha por «la paz y la democracia».

El bagaje ideológico marxista-leninista determinó el proceso revolucionario tras 1974 y continúa conformando el de la transición posterior a 1991, en lo que respecta al menos a tres importantes as-

pectos: la prioridad dada a la organización, la generalización de una política económica dirigida y la percepción de lo que hoy se entiende por la cuestión nacional. Veamos uno a uno estos tres aspectos.

Comparada con la camaradería de los intelectuales de principios del siglo XX y con las mentiras de Germame Neway, que con su hermano el general Mengistu Neway organizó el abortado golpe de 1960, los logros de la generación posterior a la década de 1960 en lo que respecta a la organización resultan francamente prodigiosos. Podríamos incluso decir que mejor le hubiera ido a Etiopía si los miembros de la intelectualidad de izquierdas hubieran mostrado algo menos de capacidad organizativa. El giro a la izquierda en los últimos años de la década de 1960 vino acompañado de la adopción de una fórmula de organización prácticamente infalible, con una variante leninista en el medio urbano y maoísta en el medio rural. Elemento clave de la fórmula fue el principio del «centralismo democrático», sin duda alguna más centralista que democrático. La fórmula se había ensayado en el ambiente estudiantil, especialmente con la creación de la USUAA (University Students of Addis Ababa / Estudiantes Universitarios de Addis Abeba), en 1966. El Derg descubrió lo útil que podía resultar y la aplicó para conseguir el mayor grado de movilización –y regulación– de la sociedad que se haya conocido nunca en Etiopía (Clapham, 1988). Valiéndose de la misma fórmula organizativa, la ERPDF aplastó la gigantesca maquinaria militar del Derg y se hizo con el poder estatal en mayo de 1991.

Desde 1974, esta misma ideología ha impregnado la política económica. Tiene en su haber la proclamación de la reforma agraria más revolucionaria jamás realizada en el continente africano, y tal vez en el mundo entero. No obstante, en la cuenta de resultados pesa también el asfixiante control de la economía nacional por parte del Estado. En el medio rural, aparte del control estatal de la tierra,

esto se tradujo en un abanico de medidas que abarcaban desde un estricto control de la comercialización de los productos agrícolas hasta ambiciosos programas de colectivización, reasentamiento y creación de nuevos poblados (Dessalegn, 1944). En el medio urbano, esta política supuso la nacionalización del suelo urbano y de las instituciones financieras y el control estatal sobre el comercio mayorista y sobre el minorista mediante corporaciones comerciales estatales y asociaciones vecinales. Las desastrosas consecuencias de este control total sobre la economía nacional son tan evidentes que no requieren mayor explicación (Eshetu y Mekonnen, 1992).

Estas consecuencias y el cambio de clima en la política internacional (la *perestroika* y la *glasnost*) forzaron, algo tarde, al Derg a una retirada de la economía dirigida. Aunque los incondicionales del WPO (Workers' Party of Ethiopia / Partido de los Trabajadores de Etiopía) insistieron durante mucho tiempo en ser más soviéticos que los propios soviéticos, finalmente la onda expansiva de la revolución de Gorbachov alcanzó también a Etiopía. En teoría al menos, la economía dirigida dio paso a una economía mixta. El Derg hizo incluso algún intento de aceptar el Programa de Ajuste Estructural del FMI/Banco Mundial; la piedra angular de dichas negociaciones era, como es de suponer, una devaluación que el Derg no estaba dispuesto a considerar. Así pues, la transición de una economía dirigida a una economía de libre mercado se realizó de forma suave, pero también incompleta. De hecho, en la política económica de la Etiopía posterior a 1991, dominada por el EPRDF, seguía detectándose una fuerte dosis residual de dirigismo, sobre todo en lo tocante al suelo –tanto en el medio urbano como en el rural–, y sin duda a la idea de la participación popular y de la toma de decisiones.

Pero podría decirse que el elemento más destacado de todo el bagaje ideológico marxista-leninista ha sido el derecho de las naciones a la autodeterminación, incluido el de secesión. Este princi-

pio se aireó por primera vez en una reunión estudiantil en Christmas Hall (el comedor estudiantil principal de la Universidad de Addis Abeba) una fatídica tarde de noviembre de 1969. El responsable fue el intrépido, por no decir temerario, líder del movimiento estudiantil Walleign Mekonnen. En 1970, el exilio argelino de muchos de los estudiantes contribuyó a una elaboración más amplia de este tema que fue firmada con el seudónimo de Tilahun Takele*. Este texto, titulado «The National Question “Regionalism” in Ethiopia» («La cuestión nacional del “regionalismo” en Etiopía»), se convirtió al poco tiempo en el evangelio del movimiento estudiantil y de la izquierda etíopes. El término «evangelio» está aquí usado intencionadamente, pues venía a ser poco más que una aplicación literal de la retórica leninista y el dogma estalinista, rico en recursos persuasivos pero lamentablemente pobre en datos empíricos. A pesar de ello el principio del derecho a la autodeterminación –y muy especialmente la fatídica coletilla anexa: «que incluye el de secesión»– se convirtió en la prueba de fuego de todo marxista etíope que se preciara de tal.

No cabe duda de que para la oprimida y explotada mitad sur del país, este principio está relacionado con un problema básico**. Pero, en su afán por adherirse a él, casi nadie se paró a plantearse algunas cuestiones fundamentales, del tipo: ¿Cuáles son las nacionalidades y cuáles las naciones en Etiopía? ¿Cómo han evolucionado en el tiempo y cuál ha sido la naturaleza de su recíproca in-

* Un seudónimo cuidadosamente escogido para simbolizar a dos generaciones de oposición al régimen de Haile Selassie, la del «padre», Takkala Walda-Hawaryat, que luchó contra el emperador con singular determinación hasta su muerte e 1968, y la del «hijo», Tilahun Gizaw, muerto por el régimen en 1969 de resultados de la reacción del gobierno ante el artículo de Walleign.

** Aunque fue la rebelión eritrea, y no el sur, la que empeoró el problema. Paradójicamente, al final el problema eritreo se resolvió fuera del marco de autodeterminación nacional que tan penosamente había construido Tilahun Takele.

fluencia? ¿Cómo ejercen concretamente su derecho a la autodeterminación? En las circunstancias económicas en que actualmente se encuentra Etiopía ¿es necesario llevar este principio hasta el extremo de la secesión? En resumen, en la práctica el principio ha acabado siendo un mero instrumento de legitimización para que cualquier grupo nacional de elite se alce en armas contra el gobierno central. Respecto a la naturaleza meramente teórica de este ejercicio, resulta revelador que las dos mayores naciones/nacionalidades de Etiopía, la amara y la oromo, sean categorías culturales más que entidades políticas territorialmente definidas. Pero tan grande es el poder de la teoría que hasta el Derg se vio obligado, muy a su pesar, a hacer concesiones en este sentido, estableciendo unidades autónomas en la República Democrática Popular de Etiopía, nacida en 1987 y desaparecida apenas cuatro años después. Tras 1991, la teoría de los estudiantes de los años 60 y 70 quedó consagrada por la constitución de 1994.

Puesto que nos movemos en el terreno de lo ideológico, es conveniente mencionar el islamismo. Como ya hemos dicho, el islamismo había quedado claramente relegado en la sociedad etíope. Uno de los mayores inconvenientes de esta situación para los musulmanes etíopes fue su exclusión del usufructo hereditario de la tierra (*rest*) tradicional en el norte del país. De resultas de ello los musulmanes se vieron obligados a dedicarse tradicionalmente al comercio. Un confuso intento del designado sucesor de Menelik Lij Iyasu (1936-1941) para enmendar esta situación acabó con su destronamiento (Bahru, 2001: 124-128). Durante el período de la ocupación fascista italiana (1936-1941), los nuevos gobernantes, de acuerdo con su política de socavar las prerrogativas políticas y las ventajas culturales de la clase dominante amara, que era cristiana, introdujeron políticas favorables al islam, como el reconocimiento legal de la *sharia*, el uso de la lengua árabe en la enseñanza y en los medios, y la construcción de mezquitas, entre otras la Gran Mez-

quita de Addis Abeba. La mayoría de estas disposiciones fueron revocadas con la restauración del régimen de Haile Selassie en 1941 (Husseïn, 1994). En 1974 comenzaron a soplar nuevos aires, esta vez autóctonos, que habían de traer un cambio más perdurable. Empezaron con una gigantesca manifestación de la población musulmana de la capital, respaldada por el apoyo entusiasta de algunos cristianos. Esta manifestación popular llevó al reconocimiento oficial del islamismo como religión nacional, concretado en la celebración oficial de tres días santos para los musulmanes y en el establecimiento de un estatus protocolario que igualaba al imán con el patriarca. Por lo tanto, lo que realmente se ha producido a partir de 1974 –corregido y aumentado después de 1991– no ha sido tanto que la Iglesia se haya visto privada de reconocimiento oficial, sino que en Etiopía se ha reconocido oficialmente la existencia tanto del islam como del cristianismo.

Finalmente, antes de concluir este breve ensayo, quisiera mencionar algunos aspectos de la prensa etíope que creo contribuirán a ilustrar esta tesis de continuidad y cambio. La prensa es dentro de Etiopía un fenómeno reciente, ya que su historia se remonta sólo a principios del siglo XX. Entre los pioneros destaca el intelectual eritreo *Blatta* Gabra-Egziabher Gila-Maryam, que empezó a difundir sus ideas sobre los problemas nacionales e internacionales tras su fuga de una cárcel italiana cercana a Assab en la que había sido recluido acusado de ser espía de Menelik. Al poco tiempo salieron a la luz dos semanarios, *Aemero* y *Berbanena Salam*. Este último, patrocinado por el entonces progresista príncipe *Ras* Tafari, el futuro emperador Haile Selassie, tuvo su momento de mayor esplendor en la segunda mitad de los años 20, cuando fue el foro de los intelectuales progresistas que Tafari había conseguido poner de su lado en su lucha contra la conservadora emperatriz Zauditu y la nobleza que la apoyaba. Para la prensa etíope, ésta fue una época de esplendor en la que los problemas nacionales vitales se discu-

tían y debatían libremente, pero desgraciadamente no duró mucho. En 1930 el ascenso al trono del joven príncipe puso el poder absoluto en sus manos; ya no necesitaba de la intelectualidad progresista ni de su libre órgano de difusión. *Berhanena Salam* sobrevivió cinco años, hasta la invasión italiana de 1935, como periódico al servicio del gobierno.

Entre 1941 y 1974 ésta fue la norma general para toda la prensa, que se volcó en la vergonzosa adulación del emperador y la obcecada defensa del régimen. La insurrección popular de febrero de 1974 produjo de nuevo una ilusión de libertad. La resaca de la represión fue tal que ni siquiera el golpe de estado del Derg pudo con ella. La expresión de opiniones diversas sobre el proceso revolucionario continuó manifestándose libremente hasta bien entrado 1975. El hecho de que la mayoría de los que escribían lo hicieran amparados bajo seudónimos evitaba la necesidad de autocensura. Esta libertad de expresión llegó a sus cotas más altas en los debates entre los incondicionales de los dos partidos de izquierdas, el EPRP (Ethiopian People's Revolutionary Party / Partido Revolucionario del Pueblo Etiópe) y el Ma'ison (AESM / All Ethiopian Socialist Movement / Movimiento Socialista de todos los Etiópes) en el «Foro Revolucionario» (siempre en la segunda página) del diario amárico *Addis Zaman* y en revistas como *Gob*. Al final, ni siquiera la ventaja del uso de seudónimos pudo librar a los autores de las iras del terror «blanco» o «rojo» que acabó con los miembros rivales en la izquierda. En 1977, después del establecimiento del régimen personal de Mengistu, la prensa entró en su época más oscura, un período de adulación permanente del «infalible» líder y de cínica manipulación del pueblo.

Tras 1991, la historia de la prensa viene sufriendo la tensión entre cambio y continuidad que ha sido el tema de este artículo. Por un lado asistimos a una proliferación sin precedentes del sector privado y a la expresión prácticamente libre de toda inhibición de

puntos de vista y opiniones sobre una diversidad de asuntos nacionales. Por poner sólo un ejemplo, no ha habido hasta la fecha ningún gobernante más caricaturizado, y no siempre halagadoramente, que el líder actual del EPRDF, Meles Zenawi. Por otro lado, la prensa privada no es precisamente fuerte, debido principalmente a su falta de profesionalidad, y a la presión y represión gubernamental que se ejercen siempre que el gobierno considera que los periódicos se han pasado de la raya. En cuanto a los medios públicos, ya sean impresos o electrónicos, no suelen dar muestra de las audacias que practican sus competidores de la privada. Como en todos los aspectos de la vida política, la situación ha empeorado desde las elecciones de 2005, que desembocaron en una situación de violencia tan pronto como el gobierno en funciones anunció la victoria. A este respecto, los peores excesos han sido perpetrados por la ETV, la cadena estatal de televisión, que ha mantenido una línea de servilismo adulador constante bajo tres regímenes consecutivos. Como dice el chiste popular, sólo los que no tienen televisión por satélite están condenados a verla. La popularidad que ha alcanzado Sheger –una de las dos únicas emisoras privadas de FM autorizadas por el gobierno– en sólo un año de funcionamiento da fe del absoluto fracaso de los medios públicos.

B. Z.

Traducción: *Rocío Martínez Ranedo*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Atieb Ahmed Dafalla 1973. «Sheikh Khojele Al-Hassan & Bela-Shangul 1825-1938». BA thesis. Haile Sellasie I University: History.
- Bahru Zewde. 2001. *A History of Modern Ethiopia 1855-1991*. Addis Ababa, Oxford and Athens: Addis Ababa University Press, James Currey, Ohio University Press.
- , 1984. «The Economic Origins of the Absolutist State in Ethiopia (1916–1935)», *Journal of Ethiopian History*, XVII.
- , 2008. *Society, State and History: Selected Essays*. Addis Ababa: Addis Ababa University Press.
- Clapham, Christopher. 1988. *Transformation and Continuity in Revolutionary Ethiopia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Crummey, Donald. 1972. *Priests and Politicians. Protestant and Catholic Missions in Orthodox Ethiopia 1850-1868*. Oxford: Clarendon Press.
- Dessalegn Rahmato. 1994. «Land Tenure and Land Policy in Ethiopia after the Darg», in Harold Marcus, ed.,
- Eshetu Chole and Makonnen Manyazewal. 1992. «The Macroeconomic Performance of the Ethiopian Economy 1974-90,» in Mekonnen Taddesse, ed., *The Ethiopian Economy: Structure, Problems and Policy Issues. Proceedings of the First Annual Conference on the Ethiopian Economy*. Addis Ababa: Ethiopian Economic Association.
- Hussein Ahmed. 1994. «Islam and Islamic Discourse in Ethiopia (1973-1993)», in Harold Marcus, ed.,
- International Crisis Group. 2009. *Ethnic Federalism and its Discontents*. Africa Report No. 153.
- Taddesse Tamrat. 1972. *Church and State in Ethiopia 1270–1527*. Oxford: Clarendon Press.
- Tesema Ta'a. 1976. «The Oromo of Wollega. A Historical Survey to 1910». MA thesis. Addis Ababa University: History.
- Tekalign Wolde Mariam. 1984. «Slavery and the Slave Trade in the Kingdom of Jima (ca. 1800-1935)». MA thesis. Addis Ababa University: History.